

contra el Juez infractor. Que el artículo 152 de la misma ley, en que se fundó el Tribunal para revocar la sentencia del Juez Conciliador, no puede tener aplicación alguna en ese caso, pues se refiere únicamente á los autos de sobreseimiento dictados por los Jueces de 1ª instancia y no á las sentencias definitivas pronunciadas por los Jueces Conciliadores.

Que habiendo ya recaído una sentencia ejecutoria en la causa seguida á Candelario Rivera, la resolución mandando instruir de nuevo el proceso, con apoyo de una disposición legal inaplicable al caso, constituye una infracción de los artículos 14 y 44 de la Carta fundamental de la República; y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 25 de Noviembre del año pasado, que declara, que:

La justicia de la Unión ampara y protege á Candelario Rivera, contra el auto de 6 de Agosto del año pasado que pronunció la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, en virtud del que revocando la sentencia del inferior y consignando al quejoso al Juez 2º del ramo criminal, lo sujetó á nuevos procedimientos por un delito de que estaba ya juzgado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias Jua. J de la Garza.—José M. Lozano.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velasquez.—José García Ramírez.—Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 3 de 1874. *Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida al Sr. Lic. D. José Isaac Sancha, por responsabilidad en sus procedimientos como Juez 1º de Distrito de esta Capital.

Pedimento del C. Fiscal del Tribunal de Circuito.

El Fiscal dice:

Que á virtud del auto dictado por esta Sala, ejerciendo las funciones de Tribunal de Circuito, en 3 de Enero último, el C. Ministro semanero procedió á instruir la sumaria contra el C. Juez 1º de Distrito José Isaac Sancha, terminando con la confesion con cargos, en la cual el acusado se remitió á lo expuesto por su defensor en un escrito que presentó al mismo C. Ministro, pidiendo por conclusion el sobreseimiento de la causa. En tal estado, el Tribunal ha mandado entregarla al que suscribe para formalizar la acusacion, que es el trámite correspondiente; y como aquella debe tener por base así las constancias del proceso como las contestaciones á los cargos, sería muy conveniente la referencia de aquellas al ocuparse de estas, con objeto de que se perciba la verdad y luz ca al fin la justicia. No debe pasar adelante el Fiscal sin protestar solemnemente, que en el estudio del proceso y en la presente respuesta, no ha sido movido por algun principio innoble, sino solo por el cumplimiento de su obligacion, segun la cual presentará los hechos de la misma manera que los perciba, y los calificará segun su conciencia le dicte, igualmente distante del desco de la impunidad y del innmerecido castigo. La comunicacion del Ministerio de Hacienda y sus contestaciones, así como las demas constancias regis-

tradas hasta la foja 28, revelaban que los procedimientos del Juzgado 1º del Distrito en la percepcion y destino del capital y réditos de la dote perteneciente á la Señora Espejo, habian sido irregulares; y como esto podia proceder ó de ineptitud del Juez ó de prevaricato, ó tambien de ambas cosas, la averiguacion era natural que se dirigiera á investigar lo que los hubiera dictado. En este punto el Fiscal está de acuerdo con el C. defensor; pero nunca podrá estarlo en que la exhibicion del dinero sea una llave que cierre la puerta del proceso, ni prueba concluyente de que no existió el delito; no obstante que un abogado conocedor del derecho, dijera en su declaracion, que era el depositario de la cantidad en cuestion y que estaba dispuesto á devolverla luego que se le previniera; porque el mismo abogado en el escrito que presentó á consecuencia de la prevencion del Tribunal, habia manifestado terminantemente que respecto de la referida cantidad, no tenia ya el carácter de depositario, sino de legítimo administrador y síndico del concurso de Rodayega, *al cual pertenecía la expresada cantidad*; y si aquella asercion arguye la inocencia del Juez, por el mismo principio, está emitida con anterioridad, y cuando no podia calcularse los efectos que produjera, convence de la culpabilidad del mismo funcionario. La entrega del dinero extinguiría la accion civil; mas nunca lavaría la mancha criminal, y por lo mismo aquella no puede ser aducida como señal indefectible de inocencia. Pasando el C. defensor á examinar la responsabilidad del funcionario público, concluye con que ninguna tiene el C. Juez por no haber pronunciado *fallo*, por el que solo debe entenderse la sentencia definitiva, única que induce responsabilidad si fue dada contra ley. Como se ve, aceptando este argumento, los Jueces podrian impunemente infringir las disposiciones mas claras y terminantes, con solo que no fuera en la sentencia definitiva: los intereses mas sagrados de los particulares y aun los del Fis-

co estarian espuestos á ser atropellados en autos que no decidieran sobre el negocio principal, y ningun correctivo habria que contuviera la arbitrariedad del Juez mientras no estuviera concluido el juicio, que se procuraría alargar hasta lo infinito, mediante una continuada infraccion, con la garantia de que solo podría exigirse responsabilidad por la sentencia definitiva que ó nunca llegaría á darse ó se procuraría que careciera de aquel defecto. Tales máximas son disolventes en derecho: con solo proclamarlas subia de entonacion la grito contra la administracion de justicia, como que ofenden aun al sentido comun; y los mayores abusos se veían revestidos con el ropaje de la legalidad, ó de la impunidad amparada por la ley. ¿Soportaría el C. defensor, que en negocio confiado á su patrocinio, cualquiera juez diera contra derecho autos y providencias, con tal que no fueran sentencia definitiva? ¿Y en ambos casos creía de buena fé que no procedia la responsabilidad?

Largo sería el catálogo de inconvenientes que resultarían de advertir que no la hay por contravencion á las leyes, sino cuando recae sobre sentencia definitiva, y solo aquellos serian suficientes para formar contraria persuacion; pero además, el diccionario de legislacion cuya autoridad no puede ser repelida por el C. defensor, una vez que lo invoca, dice en la palabra *fallar*: que es, *decidir ó determinar alguna cosa*, dando á entender la particula disyuntiva, que se falla al decidir, lo mismo que al determinar alguna cosa, y comprendiéndose en el primer miembro la sentencia definitiva, así como en el segundo la interlocutoria y los demas autos que á esta se asemejan.

El diccionario de la lengua castellana se expresa en los propios términos que el de legislacion en la acepcion forense; y ¿podrá negarse que el Juez de Distrito *determinó* mandando depositar el capital y réditos del dote de la Señora Espejo en poder del Lic. Sierra? ¿por ventura no es *determinar*, de-

cretar de conformidad con la peticion del depositario, para que se le quitara este caracter y se le convirtiera en administrador para disponer libremente de la referida cantidad? ¿No importa una *determinacion* por lo menos, la calificacion de ser ciertos los hechos presentados por el mismo letrado, y de bastante la informacion producida por D. Francisco Jimenez? Resolviendo que en estos casos no se ha *determinado*, se desconocería hasta el idioma; y para no incurrir en tan grave falta, fuerza es confesar que el Juez *determinó*, y por consiguiente *falló* en los mencionados puntos.

El mismo diccionario de legislacion, en el artículo «Sentencia interlocutoria», dice: que esta es la que el Juez pronuncia en el discurso del pleito, entre su principio y fin, sobre algun incidente, y *todo auto preparatorio para la definitiva*, citando la ley 2ª, tít. 2º Part. 3ª, en cuya última parte no pueden menos de estar comprendidos los autos que el C. defensor califica de *determinaciones vagas* y provisionales, supuesto que á primera vista se descubre que no son de mero trámite. Deben pues ser estimados como sentencias interlocutorias, pero que han determinado puntos importantes y de trascendencia, que es la razon filosófica alegada para sostener que solo hay responsabilidad por las sentencias definitivas.

Trascendental y mucho, fué el auto de secuestrar, de liso en llano, caudales declarados del Fisco por sentencia ejecutoriada: lo es todavia mas el que autorizó para disponer libremente de ellos, lo uno y lo otro sin audiencia fiscal; y pues que la trascendencia es la regla para que haya ó no lugar á la responsabilidad, queda incuestionable, que puede demandarse por los indicados autos, del mismo modo que lo es, que el Juez *determinó* y por consecuencia *falló*, no restando mas que averiguar si lo hizo contra ley.

Antes de proceder á esta espinosa tarea, parece al Fiscal indispensable hacer un recuerdo aunque breve, de los hechos que han dado mérito á esta causa, sin otro fin que

el de presentarlos tales cuales son, para que el Tribunal pueda hacer con mas facilidad la comparacion precursora de la sentencia absolutoria ó condenatoria.

Desde 14 de Enero de 1871, el C. Juez 1º del ramo civil por su sentencia definitiva y ejecutoriada, declaró: que el Fisco de la Federacion era heredero del capital y réditos de la dote perteneciente á la Señora Dª Isabel Espejo, religiosa que fué del convento de San Juan de la Penitencia, determinándose en la propia, que ejecutoriada se remitiera al Juzgado 1º de Distrito. Esto no podía tener por objeto sino hacer efectivo el cobro y entregarlo en la Tesorería General de la Nacion, pues habia precedido la convocatoria á todos los que se creyeran con derecho á los bienes; y sin embargo, hasta Junio no aparece hecho el pago. El dia 2 de ese mes D. Francisco Jimenez presentó ocurso al C. Juez 1º de Distrito, en que pedia fuese depositada la cantidad de la herencia; porque esta debía responder por sumas que el síndico del concurso de Rodallega y de los fondos del propio concurso habia ministrado á la Señora religiosa: alegando, que sin el secuestro, el concurso experimentaria dificultades para conseguir el pago, y se le obligaría á litigar con un poderoso como es el Fisco.

A pesar de la gravísima ofensa contra el Gobierno que encierran estos conceptos, los cuales bien merecen un severo castigo, el Juez sin hacer caso de ellos, y aun parece que sin notarlo siquiera, proveyó en los términos siguientes: «*Recíbese la informacion que se ofrece, y con su resultado dese cuenta*», sin prevenir fuese citado el Promotor, no obstante tratarse de un punto sobremanera perjudicial á la Hacienda. Omitido tan esencial requisito, fueron examinados los ciudadanos Vicente Perez y Teófilo Vargas, declarando el primero, que conoció á la religiosa y á una hermana de esta, quienes se expresaban con mucho cariño y gratitud con relacion á una persona que le nombraban su protector, llamándole unas

veces D. Juanito y otras el Sr. Jauregui: que por la hermana de la monja, supo que dicho Sr. habia proporcionado á esta toda clase de recursos, por lo cual afligida, le preguntó como podia pagarle, contestándole que si algo podia hacer en algun tiempo, era dar lo que pudiera á los acreedores de un Sr. cuyo nombre no recordaba, y era en un negocio en que estaba interesado el Oratorio de San Felipe, pues los recursos que les proporcionaba eran de esos bienes que tenia á su cargo. El testigo Vargas declaró haber conocido á la religiosa, á su hermana y al Lic. D. Juan Manuel Fernandez de Jauregui, sabiendo que á poder del último entraron varias cantidades pertenecientes al concurso de Rodallega, que á nombre del propio letrado llevó varias veces regalos valiosos y auxilios á la Señora Espejo, de los que participaba la hermana: que aquella le manifestó que habria perecido sin la proteccion del Sr. Jáuregui, á cuyo favor testarian si se los permitiera su constitucion y la Mitra: y que Jáuregui le habia hecho sabedor de que habia favorecido á la familia Espejo, siguiendo el ejemplo de sus antecesores por razones poderosas, y que esos auxilios los tomaba de los bienes de Rodallega, que siempre habian estado pasando de unas manos á otras, todas de la familia de Jáuregui. A continuacion, y sin hacer saber el resultado al Promotor y sin ningun otro trámite, el Juez decretó el depósito, nombrando depositario al Lic. Sierra, quien presentó escrito en 21 de Agosto, cuya copia conoce el Tribunal, dando por inconcuso que el capital y réditos exhibidos pertenecian al concurso de Rodallega, y pidiendo por conclusion que el Juzgado declarase que estaba en el uso espedito de la administracion, es decir, que como fondos del concurso podia disponer de la suma que importaban. A continuacion se dictó un auto, en que dando por ciertos los hechos, se accedió á lo pedido, omitiendo la previa citacion al representante del Fisco y la notificacion del auto. Todo esto habia quedado en un

profundo secreto, hasta que el Ministerio exitó al Tribunal; y no podia ser de otro modo, pues para nada se contaba con el defensor nato de los intereses federales. La relacion de estos procedimientos á primera vista parece inexacta por las muchas y muy graves faltas que revela; pero si mercede esta nota, antes será por haber rebajado la cantidad de aquellas que por suponer las que no existian, y el Fiscal, para cumplir con su ministerio, señalará cada una de las mismas y las leyes que el Juez ha infringido.

Recuerde la Sala, que desde Enero se recibió en el Juzgado la ejecutoria de la sentencia que declaró al Fisco heredero de la finada religiosa, no habiéndose verificado el cobro de la herencia sino hasta Junio, y eso que la persona que hizo el pago, lejos de resistirlo, estuvo muy dispuesta á hacerlo, y tan solvente que lo verificó en moneda de oro. ¿Como puede explicarse esta dilacion sin atribuirla á morosidad culpable del Juez, cuya mision era únicamente exigir el dinero y mandarlo situar en la Tesoreria general de la Nacion; ó á que de intento dió lugar para que vinieran las pretensiones infundadas de los Sres. Jimenez y Sierra, que obtuvieron una increíble deferencia? Cualquiera de estos dos extremos cuenta con datos no despreciables; y sin embargo, el Fiscal momentáneamente aparta la vista de ellos, para fijarla en los hechos que han infringido leyes vigentes muy conocidas.

El escrito de Jimenez anunciaba una verdadera demanda sobre pago de los suplementos hechos por el Lic. Jáuregui de los fondos del concurso de Rodallega á la Señora Espejo, de quien el Fisco habia sido declarado heredero; y la manera de iniciarla fué el depósito. Todos los autores de derecho convienen en ser una regla, que los juicios no pueden comenzar por secuestro ó embargo de bienes, ni por intervencion, que para el efecto viene á ser lo mismo, sino en los marcados casos que señala la ley 1ª, tit.

9, part. 3ª, en ninguno de los cuales se encontraba el que nos ocupa; y por consiguiente fué infringida esa disposición, en cuyo principio se reducen á seis, *é non mas*, los motivos *por que la cosa sobre que naese contiene la entre el demandador é el demandado, debe ser pues en fielda l.*

Los propios autores enseñan también como regla, que el juicio tampoco debe principiarse por informacion de testigos, fundados en la ley 2ª, tít. 16 de la citada partida, que proviene terminantemente que *non deven ser ante recibidos, que el pleyto sea comenzado por demanda ó por respuesta*, y en la 8ª del tít 10 que ordena, que despues de la demanda y contestacion, el Juez reciba los testigos, lo que *non podia ser fecho, si el pleyto non fuese assi comenzado*. Preceptos tan claros fueron quebrantados por el C. Juez de Distrito, lo mismo que lo fueron los contenidos en las leyes 2ª y 23 del tít. 16, la primera de las cuales manda, que *el Judgador que oviese de recibir tales testigos, devalo facer saber ante á aquel contra quien los recibe*, y la segunda, que *Recibir deve el Judgador la jura de los testigos ante quez haya su testimonio. E esta jura deve tomar seyendo la parte delante contra quien son aduchos faziendogelo ante saber é señalándole el día á que venga á ver como juran*; pues segun consta de autos, no se citó al representante del Fisco que era la parte interesada para la recepcion y examen de los titulados testigos, ni siquiera se le hicieron conocer las declaraciones.

Estas, como lo acreditan los originales, son de oídas solamente, pues el punto cardinal sobre que debian versar era, que los sumistros habian sido hechos del concurso de Rodallega, y á ninguno de los dos testigos constaba, porque el uno lo supo por la hermana de la religiosa, y el otro por el Lic. Jáuregui; por este principio, en vez de ser contestes fueron singulares, y sin embargo el Juez dió por buena la informacion, con lo cual calificó de probados los acertos de Jimenez con evidente quebrantamiento de las

TOMO V.—PARTE II.

leyes 28 y 32 del tít. y part. últimamente citados.

De notar es que ninguno de los declarantes afirma qué cantidades suplió el Lic. Jáuregui, ni por consecuencia á cuánto aboraba la deuda; no obstante lo cual se decretó el depósito por toda la suma que debió percibir la Hacienda pública.

Llama también la atencion, que en una de las declaraciones se habla de *regalos valiosos*, los cuales importan donacion, mas no préstamo; y por fin, aun el menos versado en negocios extrañará que sin previa liquidacion y sin la reclamacion menor se hubicra quitado á la Hacienda pública lo que le correspondia, perpetrándose un verdadero despojo con infraccion de la ley 2ª tít. 34, lib. 11 de la Nov. Recop.

Estos hechos no fueron conocidos del Fiscal, sino hasta que se le entregó la causa últimamente, por cuya razon no pudo hacer mencion de ellos en el pedimento de 30 de Diciembre, como lo verifica hoy ampliando los motivos de responsabilidad. Despues de tan clásicas infracciones vino el escrito del Lic. Sierra pidiendo se le declarara expedito para disponer del dinero que habia recibido en depósito, y para fundar su solicitud dá por cierto, como habia hecho Jimenez, que la herencia de la Señora Espejo era responsable al concurso, porque de sus fondos habia hecho los socorros el Lic. Jáuregui.

La pretension por mas que esté destituida de justicia y de verdad, no debiera llamar tanto la atencion porque la parte contra quien se dirigió era de suponerse que la examinara contradiciéndola si era infundada; mas lo que apenas puede creerse es, que el Juez de Hacienda, sin ningun trámite que asegurase sus procedimientos, dictara el auto de 28 de Agosto proveyendo como se pedia en virtud de ser ciertos los hechos referidos por el Lic. Sierra, y declarando con esto en muy pocas palabras, que la cantidad depositada pertenecia al concurso, pudiendo disponer de ella el síndico en las erogaciones para la secuela del negocio. ¿Quien ha-

brá que á vista de estos hechos, y aun guiado solamente por el sentido común, pueda, no ya aprobarlos sino excusarlos siquiera? ¿Como podrá sostenerse que el auto referido es de puro trámite provisional y una determinacion vaga? ¿Como negarse que el Juez determinó, y un punto de la mayor importancia, ora se atiende á los antecedentes que debieron prepararlo, ora á las consecuencias demasiado trascendentales que produjera la declaracion judicial?

Las leyes citadas ya sobre los casos en que procede el secuestro, han sido escandalosamente violadas, y en autos no insignificantes sino de bastante consideracion. En la anterior respuesta fiscal están citadas las disposiciones en que se previene, que los depósitos judiciales de dinero se hagan en el Monte de Piedad, á las cuales el C. Defensor niega la fuerza de ley aunque entre nosotros, y segun confiesa él mismo, son obligatorias, pues no es el nombre el que dá la fuerza de obligar, ni puede argüirse de inobservancia con los depósitos que se verifican á virtud de juicios ejecutivos, ya porque para estos hay ley particular, ya porque el artículo 2º del Código vigente previene: *que las leyes, reglamentos, circulares ó cualesquiera otras disposiciones de observancia general, emanadas de la autoridad, obligan, y contra su observancia no puede alegarse desuso, costumbre ó práctica en contrario*, segun el artículo 3º.

Este Ministerio ninguna duda tiene en cuanto al vigor actual de dichas circulares que el Gobierno no ha derogado, como no lo ha hecho con las de otros, cuyo origen ninguna legalidad cuenta. Además, entre las citas del Fiscal está la de la ley de 14 de Julio de 1854 que contiene la misma prevencion en cuanto á depósitos judiciales procedentes de testamentarias; y aunque ni aquellas ni esta estuvieran vigentes, el depósito habria debido hacerlo en la casa de Moneda, conforme á las reales órdenes de 5 de Abril de 1781 y 26 de Marzo de 1782, de modo que en el caso, la duda solo reca-

ria sobre cual disposicion fué la infringida; pero en ninguno puede considerarse legal el depósito en poder del Lic. Sierra, cuya idoneidad y abono ni siquiera se intentó averiguar mediante las convenientes diligencias.

A nombre del Juez acusado, contesta su defensor el cargo de que no se oyó al Promotor fiscal para el depósito, con que este fué provisional, y que en las providencias de este género no hay obligacion de hacerlo antes de dictarlas. Tal concepto en la generalidad en que está emitido, no es exacto, pues cuando á la providencia precautoria precede informacion de testigos, esta debe recibirse con citacion, conforme á las leyes señaladas, no pudiéndose citar ninguna que dispense de ese requisito.

Por otra parte, aun las que invoca el C. defensor previenen, que la medida se notifique al interesado, pues de otra suerte no podía oponerse á ella ni verificarse la junta en caso de oposicion, ni en fin, tener lugar la apelacion; y ¿al Promotor fiscal se hizo notificacion alguna aun despues de dictado el depósito? ¿se le hizo saber despues que este ya no existia, por haber sido autorizado el Lic. Sierra para disponer de él y por haber sido declarado que la cantidad correspondia al concurso de Rodallega?

Conviene el referido defensor, en que si se hubiera declarado que la dote de la Señora Espejo pertenecia al concurso de Rodallega y tal declaracion se hubiera dictado sin la audiencia del Promotor, habria habido infraccion; y ¿que otra cosa ha hecho el auto, en que se declaró ser ciertos los hechos presentados por el síndico del concurso y que la cantidad depositada pasaba á la libre administracion de este?

Este Ministerio no acepta la opinion de que solo para la sentencia definitiva deba oírse al Promotor fiscal, ni de que la audiencia de este sea únicamente de práctica; por el contrario, cree que en los negocios judiciales debe otorgarse aquella, á la persona á quien pueda ocasionar perjuicio el auto ó providencia de que se trata, siendo este de-

ber mas estrecho, cuando se interesa la Hacienda pública por los privilegios que le acuerdan las leyes; así nada importa que fuera el primer auto el del depósito, si ese auto afectaba los intereses del Erario, pues no el orden sucesivo de las actuaciones, sino su calidad y trascendencia, hace necesaria la audiencia.

El defensor despues de contestar el cargo anterior, procura vindicar á su defendido de la nota de haber ocultado la verdad. Punto es este que bien pudiera omitir el Fiscal, pues con él y sin él, los procedimientos del Juez son igualmente viciados; mas lo tocará siquiera sea brevemente, para demostrar que ha obrado con absoluta imparcialidad. En la nota que con fecha 7 de Diciembre dirigió al C. Ministro de Hacienda el repetido Juez, manifestó este que en Junio, los acreedores de la ex-religiosa habian presentado escrito, reclamando sumas á que responde la dote de la misma, por cuya circunstancia los derechos del Erario eran ilíquidos á la vez que litigiosos, y ¿era verdad esto?

El Fiscal no sabe exista escrito de los acreedores de la religiosa, sino el de Jimenez, en el que se pide el depósito: he visto tambien el del Lic. Sierra; pero este no tiene distinto objeto, y sobre todo, porque se insinúa ó crea por dichos individuos que la Señora Espejo debia por regalos y suplementos algunas cantidades al Lic. Jáuregui, y sin preceder formal demanda, ¿puede asegurarse con verdad que los derechos del Erario eran ilíquidos y litigiosos? De autos consta que la liquidacion precedió al cobro, y es bien sabido, que una cosa no es litigiosa mientras sobre ella no haya juicio formalizado por demanda y por respuesta.

Tambien es cierto que en la fecha de la citada comunicacion y en la del informe, no habia ya depósito, y la mente del Tribunal no era otra que saber adonde existia en esa vez, lo que se confirmaba con haberse ordenado la devolucion.

En fin, el Fiscal no encuentra razon para retirar ninguno de los conceptos vertidos en

su anterior pedimento; antes bien, en el presente, amplía la acusacion que aquel contiene, siempre de buena fé, segun está obligado, y confiando en que la sabiduría y justificacion del Tribunal, inspirarán la resolucion que fuere justa.

Desde la foja sétima del escrito presentado por el C. defensor, se ocupa este en desvanecer los cargos hechos por el muy digno, probo é ilustrado Fiscal segundo, en los expedientes acumulados; y si el que habla se pudiera creer dispensado de tocar los fundamentos de dichas respuestas, por temor de presentarlas con menos claridad que su autor, no debe permitir que en la contestacion se deslizen especies y apreciaciones ofensivas á tan justificado y honorable Magistrado, y con tal motivo cree necesario llamar la atencion del Tribunal sobre este punto.

El C. Fiscal segundo comprende perfectamente sus obligaciones, que cumple á satisfaccion y con aplauso: todos sus actos llevan el sello de la imparcialidad, sin que pasiones ruines influyan jamas en sus procedimientos; y si cualquier individuo debe contar con esta garantía, mucho mas el C. Juez 1º de Distrito, á quien sin duda no son desconocidas la ilustracion y probidad del C. Antonio Aguado.

Este, en desempeño de su oficio, formuló contra aquel los mismos cargos de infraccion de ley y de no haber oido al Promotor en negocios de interes fiscal; y el C. defensor contesta repitiendo, que el Juez no ha fallado definitivamente, y que la audiencia del representante del Erario, no es necesaria desde los primeros autos.

El que suscribe, en gracia de la brevedad, reproduce cuanto tiene dicho á este respecto, agregando únicamente que segun los datos de diversos expedientes, parece que el C. Promotor era un estorbo en el Juzgado, segun que el Juez no contaba con su intervencion, cuando los mas delicados la buscaban, ya para ilustrar los puntos sometidos á su jurisdiccion, ya para po-

nerse á cubierto de cualesquiera responsabilidad en sus determinaciones.

Por lo que mira á la cuestion de si los expedientes pedidos al Ministerio estaban ó no concluidos, la resolucíon es bien sencilla. Aquellos terminaron desde el momento que se consumó la operacíon que contiene, y no puede legalmente decirse que estan en giro, porque el responsable no cumple con las obligaciones contraídas; siendo de ello prueba, que las demandas son instauradas ante los Juzga-dos. Que estos hayan obtenido la reunion de expedientes, indicará que los segundos no estaban concluidos; pero no que haya de hacerse otro tanto con los que lo están. El propio C. Defensor, cree, que la cédula citada por el C. Fiscal 2º solo comprendió á los gobernadores, lo que no es exacto: estos tal vez dieron mérito para la disposición, de la que no está excluido el Juez de Distrito, sea cual fuere su categoría, mientras no se acredite, porque las Autoridades no tienen mas facultades que las marcadas en las leyes.

En concepto del suscrito, son fundadas las observaciones del C. Fiscal 2º en los expedientes acumulados, cuyos pedimentos deberán tenerse como parte de este. Del examen de aquellos y de los hechos que motivaron la presente causa, resultan comprobados los capítulos de acusación, formulados por el Ministerio público, y que el Juez ha incurrido en tan graves faltas, cuando ménos por conocida ineptitud; por falta de instrucciön y por descuido; lo que el Fiscal pide al Tribunal se sirva declarar en definitiva, imponiendo al responsable las penas designadas en los artículos 5º y 7º del Decreto de 24 de Marzo de 1813.

México, 13 de Marzo de 1872.—*Salazar Jimenez.*—Una rúbrica.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

México, Mayo 23 de 1873.—Vista esta causa instruida contra el C. Lic. José Isaac Sancha, Juez 1º de Distrito de esta Capital, por responsabilidad; la preparatoria; confesiön con cargos del acusado; respuesta al cargo, y lo pedido por el C. Fiscal, con lo demas que se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que en la presente causa, están bien justificados los hechos siguientes; primero: que por sentencia ejecutoriada pronunciada por el Juez 5º de lo civil en 14 de Enero del año próximo pasado de 1871, fué declarada la Hacienda pública de la Federaciön, único heredero de la ex-religiosa Sor Isabel Concepciön Espejo, con cuyo motivo los autos sobre el intestado de dicha ex-religiosa fueron remitidos al Juez 1º de Distrito, quien tomó conocimiento de ellos; segundo: que el haber hereditario del intestado de la Sra. Espejo, consiste en el capital de cuatro mil pesos que como dote lo fué consignado por el Supremo Gobierno y reconocia sobre las haciendas del Rosario y Maxaquiahua la Sra D. Josefa Sanz y Gonzalez, y en los réditos adeudados del propio capital; tercero: que el Juez acusado ordenó de oficio, que el censatario redimiera el capital pagando al mismo tiempo los réditos; cuarto: que en cumplimiento de esas órdenes, el representante de la censataria se presentó ante el Juez en 29 de Mayo de 1871, y le entregó personalmente y en el Juzgado, la cantidad de cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos, setenta y cinco centavos, en moneda de oro, manifestando: que á esta cantidad ascendia el adeudo por capital y réditos, segun la liquidaciön que tenia presentada al Juzgado en escrito de 25 del propio mes de Mayo; quinto: que el Juez, en vez de ordenar como debia, que el entero se hiciese en la Tesoreria General de la Naciön ó en calidad de depósito en el Monte de Piedad de Animas, recibió personalmente el dinero y lo conservó en su poder desde el citado dia 29 de Mayo hasta el dia 5 del

mes de Junio siguiente; sexto: que al siguiente día de recibido el dinero, esto es, en 30 de Mayo, ordenó el Juzgado que se remitiese á la Tesorería, con oficio, deduciendo los derechos del defensor y denunciante, á cuyo efecto mandó que se previniese á estos, que presentaran sus cuentas á la mayor brevedad; sétimo: que este auto ni se ejecutó, ni siquiera se notificó al Promotor fiscal como era de hacerse, ni aun al denunciante del intestado y al defensor del mismo, á efecto de que presentaran sus cuentas; octavo: que en lugar de remitir el dinero á la Tesorería general de la Nación, para que esta por sí ó por medio de algun funcionario suficientemente autorizado, otorgara la escritura de cancelacion en favor del deudor, el Juez autorizó por sí mismo dicha escritura; noveno: que los autos del intestado concluyen con la razon de 14 de Junio, en que se hizo constar, que al Lic. Alaman en nombre del representante de la censataria, se entregó con la anotacion respectiva, el testimonio de la escritura de imposicion que obraba en los autos; décimo: que ademas de estas actuaciones, obraban en poder del Lic. D. Luis G. Sierra dos cuadernos que exhibió al rendir su declaracion, y cuyas constancias testimoniadas obran en esta causa; décimo primero: que en el primero de los citados cuadernos, aparece; I: que en 2 de Junio del citado año de 1871, presentó escrito al Juzgado D. Francisco Jimenez, manifestando: que la dote de la ex-religiosa Espejo, responde de sumas que el síndico del concurso de D. José M. Rodallega le proporcionó de los fondos del mismo; que en consecuencia, los derechos del Fisco no eran líquidos y determinados: que *si la pérdida de otros intereses del mismo concurso, tratándose de un simple particular, es casi irreparable, tenia mayores proporciones si se obliga á liquidar con un poderoso como el Fisco;* y por último, que esto hacia necesaria la providencia que pedia, esto es, que el Juzgado ordenara la retencion ó depósito de la dote, recibién dose pre-

viamente la informacion que se ofrecia rendir; II: que á pesar de que el escrito que acababa de extractarse solo aparece firmado por J. Jimenez, sin estar autorizado con la firma de algun abogado, cuya circunstancia habria sido bastante para que el Juzgado, procediendo en uso de su noble oficio, lo repeliera; se proveyó al día siguiente 3 de Junio, mandando que se recibiese la informacion ofrecida; III: que en el mismo día 3 de Junio, se recibió declaracion á Vicente Perez y á Teófilo Vazquez, quienes declararon sustancialmente, que el finado Lic. D. Manuel Fernandez de Jáuregui, hizo frecuentes regalos y dió auxilios pecuniarios á la ex-religiosa Espejo y á su hermana; que la ex-religiosa se manifestó siempre muy agradecida; que dijo á Perez, que apenada con tantos beneficios, no sabia como compensarlos, y que su benefactor le manifestó (á la ex-religiosa) que si algo podia hacer por él en algun tiempo, era dar lo que pudiera á los acreedores de un Señor, cuyo nombre no recuerda el testigo: que al testigo Vazquez manifestó la misma ex-religiosa, que si sus instituciones y las instrucciones de la Mitra le dieran libertad, habria testado en favor de Jáuregui y de su propia hermana, y que al mismo testigo le dijo el Lic. Jáuregui, que tenia razones muy poderosas para socorrer á la ex-religiosa, y que esos socorros los tomaba de los bienes del concurso de Rodallega, que habian pasado de unas manos á otras de la familia de Jáuregui; IV: que con tan fútiles fundamentos, el Juzgado el mismo día 3 de Junio en que se recibió la informacion, decretó que se nombraba provisionalmente y con el carácter de depositario, al C. Lic. Luis G. Sierra, de la suma valor de la dote de la ex-religiosa Espejo, y ordenó que se citara á junta para el día 6 del propio mes de Junio; V: que en 5 de Junio, despues de hecho saber su nombramiento al Lic. Sierra, se le entregó la suma de cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos setenta y cinco centavos, cuyo recibo firmó el depositario en las mismas

actuaciones que posteriormente y sin saberse el motivo obraban en su poder; VI: que al llegar á esta situación las actuaciones, esto es, decretado el depósito y entregado el dinero al depositario, dejó de actuarse con la notable actividad con que se había procedido, pues no aparece que el auto del día 3 se haya notificado ni al denunciante Jimenez ni al Promotor fiscal, y menos que se hayan hecho las citaciones prevenidas, para la junta que debía verificarse el día 6 de Junio; VII: que en lugar de esa actividad en los procedimientos, aparece con fecha 30 de Junio, esto es, veinticuatro días después del en que se debía verificar la junta, una razón del secretario del Juzgado, en la que se hace constar que por estar pendiente la rendición de cuentas del síndico del concurso de Rodallega, interesado en este negocio, no había podido verificarse la junta decretada; VIII: que después de esta razón se encuentra el auto de 22 de Julio, por el que se declara, que estas actuaciones pertenecen al concurso de Rodallega, y se ordena, que en estado, se dé cuenta con ellas, después de cuyo auto solo se encuentra el de 6 de Diciembre de 1871, en que se manda que se conteste la comunicación del día anterior con presencia de los antecedentes.

Considerando: que además de lo referido, aparece de otro cuaderno perteneciente á los autos del intestado; décimo segundo: que en 21 de Agosto de 1871, nombrado ya síndico del concurso de Rodallega el Lic. Sierra, cuyo nombramiento fué hecho por el Juez acusado en 5 del mismo Agosto, presentó dicho letrado, con el carácter expresado, un escrito en que aseguró que en 5 de Junio del mismo año había sido nombrado depositario de la dote de la ex-religiosa Espejo: que por las constancias que obraban en su poder, aparecía que dicho capital pertenecía al concurso que representaba; que siendo el peticionario depositario del capital referido desde el momento en que fué nombrado síndico del concurso de Rodallega, al que pertenece el mismo capital, se ha-

bía verificado *ipso jure* una verdadera consolidación, y en virtud de ella había entrado el síndico en la administración de todos los capitales, incluso el expresado; por lo que concluye pidiendo, que con las reservas y salvedades legales, se declare que está en el uso expedito de la administración del mencionado capital; décimo tercero: que á esto escrito proveyó el Juzgado sin audiencia ni citación del Promotor fiscal, y sin más trámites, el auto de 23 del propio mes de Agosto, que literalmente dice: *Siendo ciertos los hechos referidos en el anterior escrito, y con las condiciones que en él se expresan; como lo pide.*

Considerando: que además de las actuaciones que se han referido, en que se notan graves faltas y transgresiones, hay entre los incidentes acumulados, dos que igualmente llaman la atención por la irregularidad de los procedimientos, y son: uno en que aparece, que el Lic. D. José M. Medina se presentó por escrito ante el Juzgado de Distrito, á cargo del Juez acusado, manifestando: que el Ministerio de Hacienda había rehusado contratar con D. Manuel Cano, la enagenación de ciertos capitales; que el Gobierno como parte contratante no tenía libertad para contratar ó no, y por lo mismo, pedía el expresado Medina que el Juzgado pidiera á la Sección 6ª del Ministerio de Hacienda, el expediente número 173: y que en su vista y apareciendo que los capitales se hallan dentro de los requisitos de la ley, el Juzgado ordenara que se aplicaran á D. Manuel Cano, en cuyo nombre se había hecho la denuncia, y con quien debían entenderse las diligencias subsecuentes, por ser el dueño del negocio: que á este escrito, con audiencia del Promotor fiscal, quien incurrió en una falta semejante á la del Juez, se proveyó de conformidad, esto es, ordenándose que se pidiese al Ministerio de Hacienda el referido expediente número 173: que el otro incidente que ha llamado la atención del Tribunal, es el promovido ante el mismo Juzgado de Distrito

por D. Manuel Cano Soriano, pidiendo que se declare nula la cesion de un capital, que el Ministerio de Hacienda hizo en su favor: que se pida el expediente relativo á la adjudicacion de la casa número 6 del callejon de Camarones, existente en la Seccion 6ª del Ministerio de Hacienda, y que se prevenga á la Tesoreria general, que se abstenga de proceder en este negocio, en contra Cano, ni contra su fiador, ni contra la finca; que á esta solicitud provea el Juzgado: "Como providencia provisional y precautoria, librese á la Tesoreria general la orden que se pide en el primer punto; pídase el expediente á la Seccion 6ª del Ministerio de Hacienda, y recibido que sea, córrase traslado al Promotor."

Considerando: que en los procedimientos ó actuaciones que se han extractado, se nota lo siguiente; 1º: que el Juez acusado, en lugar de ordenar que el entero que hizo el Lic. Alaman en nombre de la censataria, se hiciera en la Tesoreria General de la Nacion, recibió él mismo personalmente el dinero, que conservó en su poder desde el 29 de Mayo hasta el 5 de Junio del año próximo pasado; 2º: que de la misma manera, en lugar de ordenar que la Tesoreria general de la Nacion, ó el Ministerio de Hacienda, otorgara la escritura respectiva de cancelacion, la otorgó él mismo; 3º: que en vez de ordenar que el dinero se depositara en el Monté de piedad, caso de que procediera depósito solicitado por F. Jimenez, ordenó que el depósito se hiciera en poder del C. Lic. D. Luis G. Sierra, sin garantía de ninguna especie, y sin que pueda decirse que la presta bastante el notorio abono ó fortuna del depositario; 4º: que el depósito ó socheistro del dinero, se decretó sin tener personeria bastante D. E. Jimenez que lo solicitó, pues no se lo daba la circunstancia de ser denunciante del concurso de Rodallega, cuyo síndico, ó los acreedores del mismo concurso, eran los únicos que podian solicitar semejante providencia, que siempre se dicta bajo la responsabilidad del

que la pide, y del Juez que la ordena; que se decretó la providencia con fundamento en las declaraciones de los testigos que en manera alguna justifican la legitimidad del supuesto crédito en favor del concurso de Rodallega; y por último, que al decretarla, tampoco se tuvo presente que no basta para justificar esa clase de providencias que las pida una parte legítima, y que se justifique la realidad del crédito, sino que es tambien necesario que haya urgencia y que se tema fundadamente que el deudor se ausente, ó enagene ó oculte sus bienes, quedando insolvente y burlando maliciosa y fraudulenta a su acreedor; cuyas circunstancias no concurrían ni se acreditaron en el caso; 5º: que ordenado el depósito y entregado el dinero al depositario, el juzgado no cuidó de que se citara y tuviera la junta ordenada en el auto del día 3 de Junio, y ni siquiera de que se hiciera saber al Promotor fiscal la providencia decretada, incurriendopor lo mismo en una grave falta. El Juez y el secretario del Juzgado, cuyo funcionario se conformó con hacer constar en una razon con fecha 20 de Junio, que no se habia tenido la junta por estar pendiente la rendicion de cuentas del síndico del concurso de Rodallega; 6º: que en el auto de 23 de Agosto que autorizó al Lic. Sierra, depositario del dinero y síndico del referido concurso de Rodallega, á disponer del dinero depositado para acudir á las necesidades del concurso, el Juez aeeveró ser ciertos los hechos alegados por el síndico para fundar su pretension, esto es, que el dinero pertenecia al expresado concurso por haberse verificado *ipso jure* la consolidacion, lo que segun el tenor del escrito de Sierra, significa que sus obligaciones como depositario habian quedado, *ipso jure* extinguidas por tener al mismo tiempo el carácter de representante de los acreedores de Rodallega, á cuyo concurso era deudora la intestamentaria de la Sra. Espejo, hecho que no tiene mas fundamento que las declaraciones referidas de los testigos Perez y Vazquez;

7º: que el conjunto de estos hechos en su natural relacion, hace presumir de una manera vehemente, que el Juez acusado tuvo el pensamiento de hacer desaparecer la cantidad pagada por la Sra. Sanchez, en provecho propio, valiéndose al efecto como de un instrumento del Lic. Sierra ó compartiendo con él las ganancias; 8º: que si bien esta presuncion tiene muy sólidos fundamentos, tanto mas cuanto que los delitos de esta naturaleza ordinariamente no pueden probarse sino por presunciones, el Tribunal no encontrando plena y jurídicamente comprobado el delito, debe creer que los procedimientos del Juez, tanto en lo relativo al dinero de que se trata, como en lo que se mira á los incidentes acumulados, esto es, á las demandas intentadas por el Lic. Medina y por Cano Soriano, son hijos de una grande impericia ó ignorancia, que hace indigno al abogado que la revela, de desempeñar las difíciles y delicadas funciones de la judicatura; 9º: que esta ignorancia del Juez, se deja conocer en toda su estension en los irregulares procedimientos de los incidentes referidos, pues es evidente que el escrito que presentó el Lic. Medina, importa una verdadera demanda contra el Gobierno; que debió repelerse desde luego ese escrito por expresarse en él que se presentara en nombre de Cano, dueño del negocio, sin exhibir ni aun expresar que se tuviera poder bastante del referido Cano; que aun presentada en forma de demanda, siendo el Juzgado notoriamente incompetente, no debió tomar conocimientos de ella, ni aun con la conformidad del Promotor fiscal, que si bien es representante del Fisco, no puede como el comun de los litigantes prorogar la jurisdiccion incompetente del juez; y por último, que aun siendo el juez competente, no debió comenzar el juicio por pedir á solicitud del actor el expediente que obraba en la seccion 6ª del Ministerio de Hacienda, debiendo ser á cargo del mismo actor, presentar sus pruebas en el tiempo debido y con las formalidades correspondientes:

que en el otro incidente de Cano Soriano hay que notar lo mismo, respecto de la demanda que importa su primer escrito, y las irregularidades ya notadas antes respecto de la orden dada á la Tesoreria General de la Nacion, con el caracter de providencia provisional y precautoria.

Considerando: que aunque por regla general el error en los Jueces no es punible, sobre todo cuando de las actuaciones aparece que el Juez puso toda la diligencia necesaria para el acierto, cuando erró en materia cuestionable, ó cuando lo hizo en puntos difíciles de derecho, hay casos en que, procediendo el error de ignorancia, es imputable al Juez que lo comete, porque *"es torpeza y lata culpa ignorar uno el arte que profesa, y el oficio de Juez de que se encarga,"* como dice Bobadilla. Lib. V cap. III num. 26, y en otro lugar al num. 27. agrega *"Pero porque el Juez imperito acepta el oficio y le pretende, comete culpa en aceptarlo, si tras esto no examina bien el hecho y estudia el derecho y le guarda."*

Que por esta razon, el Juez que por impericia falla contra derecho, se dice que *"hace suyo el pleito,"* y debe ser condenado á satisfacer á la parte los daños y perjuicios causados, como lo enseñan los autores antiguos: Paz tom. 1º par. 1ª tiem. 1º num. 52 y sig. y lo deciden las leyes 24, tit. 22 part. 3ª. Considerando: que con fundamento de estas consideraciones, el decreto de 24 de Marzo de 1813, que es el aplicable al caso, ordenó en su artículo 6º que si un Magistrado ó Juez fuere convencido de conocida ineptitud, esta causa será suficiente de por sí, para que el culpado pierda el empleo y no vuelva á administrar justicia.

Considerando: que por lo que va expuesto, el C. Juez 1º de Distrito ha revelado en el desempeño de sus funciones judiciales grande ineptitud; con fundamento en el citado artículo 6º del decreto de 24 de Marzo de 1813 y artículo 3º del Código penal, el Tribunal de Circuito del Distrito federal, sentenciando definitivamente esta causa,

condena al C. Lic. José Isaac Sancha á la pena de distitucion de empleo, declarándolo inhabil para volver á administrar justicia.

Hágase saber, y con lo que digan las partes dése cuenta, comunicándose al Juzgado de Distrito que queda á su disposicion la suma que importa la dote de la ex-religiosa Espejo, cuya suma se halla en calidad de depósito en la Tesorería General de la Nacion, y dése á esta Oficina el correspondiente aviso.

Así por mayoría lo proveyeron los CC. Presidente y Magistrados que formaron en este negocio la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, y firmaron — *Manuel Posada.*—*José Maria Guerrero.*—*Ramon Rodriguez.*—*José Maria Lozano.*—*A. Zerecero.*—*Cirio P. de Tagle,* secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 12 de 1872.—*Cirio Tagle.*

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal dice; que se ha corrido traslado de un ocurso en el que el Sr. D. Manuel Dublan, con el carácter de defensor de D. Isaac Sancha, en la causa que se está siguiendo por responsabilidad por sus procedimientos como Juez 1º de Distrito de esta Capital, en el que se solicita se desglosen de la causa unas copias simples que el Lic. Barron dejó olvidadas al informar en 2ª instancia ante la 3ª Sala de esa 1ª Corte Suprema. El Fiscal, al dar su dictámen en esa solicitud, no cree conforme acceder á ella; dá por razon, que esas piezas aunque simples, son en la actualidad y por el momento unas piezas que corren en autos, que estuvieron bajo la jurisdiccion de la 3ª Sala, toda vez que forman parte del alegato del encausado y se adujeron como razones en pró de la defensa del Lic. Sancha. Separarlas ahora que la causa está en un estado de sustanciacion, bien que en úl-

TOMO V.—PARTE II.

tima instancia seria extemporáneo, y sin que haya para ello una urgencia notoria.

La Sala en su secretaría, dá vista de todas las constancias de autos con bastante anticipacion al dia fijado para la audiencia; y por lo mismo, los interesados tienen tiempo de sobra para imponerse de todo el expediente y sacar cuantos apuntamientos le sean convenientes.

Ahora, si lo que se pretende es dar lectura á las expresadas copias en dia de la vista, puede hacerse esto pidiendo el patrono que informe, y la secretaría lo hará indudablemente.

Así pues, el suscrito no halla razon legal ni de conveniencia, para acceder por ahora á la solicitud del Sr. Lic. Dublan.

Por último; el suscrito se permite hacer notar á esa Sala, que el presente escrito no viene estendido en el papel sellado correspondiente.

México, Noviembre 13 de 1873.—*Altamirano.*

México, Noviembre 13 de 1873.—Cítese para la revision de este artículo.—*Landa,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 22 de 1873.—Vista en grado de súplica la causa que por responsabilidad se ha instruido al Sr. Lic. D. José Isaac Sancha, por sus procedimientos como Juez 1º de Distrito de esta Capital, en las diligencias que practicó sobre cobro, detension y aseguramiento de la cantidad de cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos, setenta y cinco centavos, correspondientes al Erario federal, en calidad de heredero ab-intestato de la religiosa exclaustrada Sor Isabel Concepcion Espejo, segun sentencia que causó ejecutoria de 14 de Enero de 1871, pronunciada por el Juez 5º de lo civil de México; y por cuyo motivo, los autos sobre dicho intestado pasaron al

conocimiento del dicho Juez 1º de Distrito: visto el fallo que en 1ª instancia dictó la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito, fungiendo como de Circuito, en 23 de Mayo próximo pasado, por el que se condena al Lic. D. José Isaac Sancha á la pena de destitucion de empleo, declarándolo inhábil para volver á administrar justicia. Vista la sentencia que en grado de apelacion decretó la 3ª Sala de esa Corte Suprema, en 3 de Julio último, fallando: que el Juez de Distrito Lic. José Isaac Sancha, quede suspenso en el empleo, y del que goze de sueldo por un año, contado desde la fecha en que esa sentencia cause ejecutoria, devolviendo al Erario los sueldos que haya percibido desde que esté encausado. Lo pedido ante esta Sala por el Sr. Fiscal; lo alegado al tiempo de la vista por el Lic. D. Manuel Dublan como defensor del Juez encausado, y en representacion de los demas defensores. Considerando: que de las constancias procesales, no resulta plenamente probado que en los defectos de sustanciacion y providencias dictadas por el Lic. Sancha, en los expedientes que sirvieron para formarle los diversos cargos que obran en la presente, hubiese habido dolo en ninguna de las especies definidas por las leyes 12, 57, 63, 64 y 65 de la part. 5ª y 2ª, tít. 16 de la 7ª; que por lo mismo, no es de imponerse la pena que la ley designa para el caso de verdadero delito; que tampoco los cargos hechos al Lic. Sancha, importan la gravedad de los actos á que se refieren los artículos del 1º al 6º de la ley de 24 de Marzo de 1813, ni el 7º de la misma puede ser en el caso exactamente aplicable; por que ni se llegó á pronunciar fallo definitivo contra ley expresa por el Lic. Sancha, ni los defectos de sustanciacion en que incurrió, dieron motivo para que se mande reponer el proceso, ni el negocio en que tuvieron lugar esas faltas es del Orden criminal, á los que sin duda se refiere el artículo 7º antes citado; que mas bien por las actuaciones que se tienen á la vista, debe considerarse que el Lic.

Sancha ha incurrido en culpa, atento el sentido de la ley 11 tít. 33 part. 7ª, culpa que sin embargo no debe quedar sin castigo; tanto ella por su misma naturaleza tiene una importancia que ya es punible, cuanto para evitar en lo sucesivo la comision de otras mayores; de conformidad en parte con lo pedido por el Sr. Fiscal, y con fundamento del artículo 7º de la ley 24 de Marzo, de la que se ha hecho mérito; de la fraccion 3ª, artículo 23 de la de 14 de Febrero de 1826, y en 29 de la de 29 de Mayo del mismo año, y por último, de la 8ª tít. 31, part. 3ª; se decreta.

Primero: que se reforme la sentencia pronunciada por la tercera Sala de esta Corte Suprema en 3 de Julio próximo pasado, declarándose: que se impone al Lic. D. José Isaac Sancha, un año de suspension de empleo; deliende computarse ese tiempo, desde el dia que cause ejecutoria este fallo, y sin que durante el disfrute ningun sueldo.

Segundo: se revoca la expresada sentencia, en la parte que previene al Lic. Sancha devuelva las cantidades que por vía de sueldo ha percibido durante el actual proceso.

Tercero: devuélvanse las actuaciones á la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito en su calidad de Circuito, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes.

Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogaszon.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.